

Ayotzinapa: el dolor y la esperanza

Luis Hernández Navarro*

La crisis fue propiciada por un hecho inesperado. El 26 de septiembre, la policía municipal de Iguala, Guerrero, atacó salvajemente a un grupo de ochenta alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Les disparó a quemarropa sin advertencia alguna; los detuvo y luego los desapareció. Cuatro hechos asociados entre sí nos permiten explicarnos el por qué de la masacre. En primer lugar se encuentra la estigmatización de los normalistas rurales en general, y de los de Ayotzinapa en particular; la impunidad generalizada que prevalece en el estado de Guerrero y que ha llevado al asesinato y desaparición de luchadores sociales sin que los responsables hayan sido castigados; el clima de delincuencia en el que diversas bandas disputan centros de producción y mercados de drogas, y por último la existencia de un narcoestado. La incapacidad gubernamental para esclarecer los hechos y la impunidad con la que se ha protegido a los políticos involucrados han provocado una oleada de rabia en todo el país. Los hechos han sacudido a la opinión pública en todo el mundo. La Casa Blanca, el Papa Francisco y la misma Unión Europea han tomado cartas en el asunto. La imagen del presidente Peña Nieto se resquebrajó, a pesar de que había adquirido notoriedad mundial al haber impulsado con éxito —aunque sin consenso social— un nuevo ciclo de reformas neoliberales.

La crisis

El Estado mexicano vive, desde fines de septiembre, una profunda crisis. Millones de ciudadanos indignados —en su gran mayoría jóvenes— exigen en las aulas, en las calles y en las redes sociales la renuncia de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal navega sin brújula. Su estrategia parece consistir en ganar tiempo, esperar a que la marea

del descontento baje y se produzca un milagro. Mientras tanto, una parte importante del mundo empresarial y de la clase política claman por una salida represiva.

La crisis fue propiciada por un hecho inesperado. El 26 de septiembre, la policía municipal de Iguala, Guerrero, atacó salvajemente a un grupo de ochenta alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Literalmente los cazó como conejos. Les disparó a quemarropa sin advertencia alguna; los detuvo y luego los desapareció. A uno de los jóvenes lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.

Hasta la fecha, y a pesar de que existen diversas versiones oficiales preliminares que señalan que los desaparecidos fueron entregados por la policía al grupo delincuenciales Guerreros Unidos, se desconoce el paradero de quienes los habrían asesinado, quemado y habrían esparcido sus cenizas en un río.

Cuatro hechos asociados entre sí nos permiten explicarnos el por qué de la masacre. En primer lugar se encuentra la estigmatización de los normalistas rurales en general, y de los de Ayotzinapa en particular; la impunidad generalizada que prevalece

* Investigador independiente y periodista de *La Jornada*.

en el estado de Guerrero y que ha llevado al asesinato y desaparición de luchadores sociales sin que los responsables hayan sido castigados; el clima de delincuencia en el que diversas bandas disputan centros de producción y mercados de drogas, y por último la existencia de un narcoestado.

Los alumnos de Ayotzinapa eran jóvenes; en su mayoría son hijos de familias campesinas, estudiantes de una Normal Rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada y los asesinaron. Defendían la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso los secuestraron y ejecutaron.

La incapacidad gubernamental para esclarecer los hechos y la impunidad con la que se ha protegido a los políticos involucrados han provocado una oleada de rabia en todo el país. La agresión a los estudiantes fue la gota que derramó el vaso de una ciudadanía asolada por la violencia. En los últimos 8 años, en medio de una guerra contra las drogas, han sido asesinadas unas 120 mil personas y han desaparecido alrededor de 30 mil, en su mayoría jóvenes.

Los hechos han sacudido a la opinión pública en todo el mundo. La Casa Blanca, el Papa Francisco y la misma Unión Europea han tomado cartas en el asunto. La imagen del presidente Peña Nieto se resquebrajó, a pesar de que había adquirido notoriedad mundial al haber impulsado con éxito —aunque sin consenso social— un nuevo ciclo de reformas neoliberales —especialmente la privatización de la industria petrolera— y pese a que se presentaba como un “gran estadista”. Los esfuerzos de sus socios comerciales por sacarlo a flote han naufragado.

El narcoestado

El día del ataque a los jóvenes estudiantes, María de los Ángeles Pineda de Abarca, presidenta de una institución pública municipal encargada de proporcionar asistencia social a las familias, rindió su informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, era una de las principales aspirantes a la alcaldía para 2015; es una figura de enorme influencia política e integrante de una familia ligada al narcotráfico.

El alcalde José Luis Abarca Velázquez, uno de los personajes señalados como responsables de la agresión, pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de una plaza comercial y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña

electoral en favor del hoy gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, y un año después financiar la suya propia. Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el centro-izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes *narcotraficantes* de la región. De inmediato se sumó a las filas de Nueva Izquierda, la principal corriente del PRD, y fue responsable principal de su acercamiento al gobierno de Peña Nieto.

Desde su llegada al ayuntamiento, José Luis Abarca había sido acusado de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El 30 de mayo de 2013, ocho miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron *levantados* por un comando. Tres fueron *ejecutados*. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de los hechos, y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo Hernández Cardona, disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho, después de espetarle: “Qué tanto estás chingando con el abono. Me voy a dar el gusto de matarte”.

Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas. Es un valle rodeado por nueve montañas en la región norte de Guerrero; es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los *cárteles* elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana. Es también puerta de salida de una de las heroínas más puras que se elaboran en el mundo. Allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemónicas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión de los Beltrán Leyva.

La guerra de *cárteles* por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con La Familia y Los Rojos, una célula encabezada por Leonor Nava Romero, “El Tigre”, hermano de Jesús Nava Romero, “El Rojo”, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, abatido en 2009 en Cuernavaca. El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento.

La disputa en Guerrero forma parte de una guerra más general librada en territorio nacional. El escritor italiano Roberto Saviano, reconocido por sus libros sobre el negocio de las drogas, asegura que en este momento México es el centro del mundo. Es el país que está experimentando con más violencia las contradicciones del capitalismo. México

—dice— cuenta con las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias del mundo. Aquí se hacen negocios con la cocaína por valor de muchos miles de millones. El dinero se lava luego en los mejores bancos de Estados Unidos, como han demostrado las investigaciones realizadas por las propias autoridades americanas. México —sentencia— es como un Estado más de Estados Unidos, pero sin sus leyes ni sus reglas. El crimen organizado disfruta aquí de todas las ventajas de Estados Unidos, pero sin los inconvenientes. Las huellas de esta disputa, y de paso de la verdadera naturaleza del Estado en la entidad, pueden seguirse a través de los mensajes públicos de las bandas delincuenciales.

Una *narcomanta* de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro de donde se encuentra el 27 Batallón de Infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, “El Choky” solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

“El Choky” fue señalado en un primer momento por el fiscal general del estado, Iñaky Blanco, como jefe de sicarios de Guerreros Unidos y responsable de ordenar la matanza y desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre, tras el ataque contra ellos de policías y sicarios.

La lista de los asociados al grupo delincencial delatados en la manta es larga: ocho alcaldes, directores de Seguridad Pública, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (un personaje asociado al cacique local Rubén Figueroa) y distintos personajes. Según el denunciante, estas son las personas que el gobierno deja libres y cometiendo tanto delito contra la población. Finalmente, aclara: “no toda la culpa la tengo yo”. Firma: “Atte: *Choky*”.

El clima delincencial denunciado por el *narcomensaje* no es exclusivo de Iguala y de siete alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía local y el crimen organizado está presente en muchos municipios de Guerrero. Se trata de una relación que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales, dirigentes partidarios, jefes de la policía y mandos militares. Es por ello que podemos caracterizar al régimen político existente en la entidad como un *narcoestado*.

Denuncias como la de “El Choky” corren de boca en boca entre los guerrerenses. Empresarios, dirigentes sociales y periodistas han documentado este nexo. Parte de la prensa local y nacional las ha publicado. En algunos casos, como en Iguala con el asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, incluso se han presentado acusaciones formales ante las autoridades correspondientes. Todo ha sido en balde. Quienes han alertado sobre la extensión y profundidad de la *narcopolítica* en la entidad han sido eliminados y amenazados. Cuando el empresario Pioquinto Damián Huato, líder de la Canaco en Chilpancingo, acusó a Mario Moreno, alcalde de la ciudad, de tener vínculos con el grupo delincencial “Los Rojos”, fue víctima de un atentado en el que murió su nuera y quedó herido su hijo.

Invariablemente, los políticos señalados han negado las acusaciones y las han explicado como resultado de rencillas políticas, que ellos no son responsables del comportamiento de sus familiares o amigos. Han dicho que las autoridades deben investigarlos y que están en la mejor disposición de aclarar las cosas. Pero nada se ha hecho. El pacto de impunidad que blinda a la clase política ha actuado una y otra vez.

Según el obispo Raúl Vera, quien estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano entre 1988 y 1995, la impunidad es la característica más lacerante de Guerrero y su desafío más importante. Su extensión y persistencia —señala— alienta el crimen y la violación de los derechos humanos y la dignidad. Pero la violencia no es sólo asunto de disputas entre grupos político-delincuenciales por centros de producción, rutas y plazas. Es también resultado de la decisión de los poderes fácticos de deshacerse de líderes sociales opositores y de la protección que desde el poder se les brinda a quienes los liquidan o desaparecen.

Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Ángel Aguirre son múltiples. La relación de asesinados y detenidos-desaparecidos durante su administración es enorme.

Entre otros muchos, forman parte de ella los ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, los dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata: Raymundo Velázquez y Samuel Vargas, la ambientalista Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, el síndico de Iguala, Justino Carbajal, Rocío Mesino —que estaba al frente de la Organización Campesina de la Sierra

del Sur–, los campesinos Juan Lucena y José Luis Sotelo –promotores de una autodefensa en Atoyac– y los organizadores campesinos José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo.

La *narcopolítica* no es asunto exclusivo del viejo PRI. Integrantes de varias corrientes en el PRD han sido señalados como parte de ella. De manera reiterada, el miembro de Nueva Izquierda y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega, ha sido señalado como jefe del grupo “Los Ardillos”. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes de la AFI y fue *ejecutado* al salir libre.

Servando Gómez, “La Tuta”, reveló en un video que Crescencio Reyes Torres, hermano de Carlos, líder del sol azteca en la entidad y parte del Grupo Guerrero, dirigido por David Jiménez, es uno de los principales dueños de laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación.

Al mismo gobernador con licencia, Aguirre, se le ha relacionado reiteradamente con el cártel Independiente de Acapulco. De su líder, Víctor Aguirre, se dice que es primo del mandatario. Por supuesto, tanto el gobernador como el resto de los acusados han rechazado enfáticamente cualquier nexo con grupos delincuenciales.

Pese a la multitud de denuncias contra ediles y funcionarios en la entidad, los arrestos han sido escasos. Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue detenido por secuestro y delincuencia organizada. Él se reivindicaba como parte del Grupo Guerrero. El oficial mayor de Chilapa, el priísta Vicente Jiménez Aranda, fue apresado por secuestro. La desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa destapó la cloaca de la *narcopolítica* guerrrerense. Desde entonces, no la han podido tapar.

Las Normales Rurales

La Normal Rural de Ayotzinapa (el lugar de las tortugas en náhuatl) es un centro de formación de profesores para comunidades campesinas. Fundada en 1926 como parte de una red de escuelas similares, es uno de los últimos baluartes de la Revolución Mexicana de 1910-1917, con sus promesas de una reforma agraria radical y educación libre, laica y gratuita para todos.

El normalismo rural es una comunidad imaginaria integrada no sólo por los alumnos que estudian en sus aulas y viven en sus internados. De ella forman parte también los poblados de donde provienen los estudiantes, los grupos

campesinos a quienes se atiende en las prácticas escolares y las comunidades a donde van a laborar sus egresados. Son parte sustancial de ella los maestros en activo que se graduaron en sus muros. A todo ellos, lo que sucede allí les atañe.

Las Normales Rurales son una de las pocas vías de ascenso social que tienen los jóvenes en el campo. El destino que se forjen gracias a sus estudios incide en la vida de las comunidades. Lo que acontece con ellas no les es ajeno. Son suyas: son un legado vivo de la Revolución Mexicana, una herencia de la escuela rural y el Cardenismo, al que no están dispuestos a renunciar.

Los alumnos que se instruyen en esas escuelas cuentan además con una de las organizaciones estudiantiles más antiguas en el país: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Fundada en 1935, ha desempeñado un papel fundamental en la sobrevivencia de las Normales Rurales, permanentemente acosadas por autoridades educativas y gobiernos locales. Sus dirigentes deben ser alumnos regulares, tener buena conducta y un promedio escolar no menor de ocho. Sólo los mejores alumnos representan a sus compañeros. Sus líderes son jóvenes formados políticamente, con capacidad de análisis, dotes organizativas y visión.

Esa comunidad transgeneracional e intercomunitaria es la que ha evitado que las Normales Rurales hayan sido cerradas en el país, es la que ha resistido las agresiones en su contra, es la que ha hecho posible la supervivencia del proyecto, y es la que ha articulado la lucha por la presentación con vida de sus jóvenes desaparecidos. No son sólo 43 jóvenes desaparecidos; detrás de ellos están más de cuatro decenas de padres dolientes y sus familias extensas, en su mayoría de muy escasos recursos, que pasan las noches en vela esperando que sus hijos aparezcan. A su lado se encuentran decenas de comunidades, casi todas rústicas, que ruegan por el retorno con bien de sus paisanos. Hombro con hombro, marchan unos 500 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que aguardan el regreso de sus compañeros de banca y de dormitorio.

Como si fueran un ejército, los acompañan miles de egresados profundamente comprometidos con la escuela que les ha permitido salir adelante en su vida, muchos de ellos laborando en los poblados más remotos de Guerrero, que viven como un agravio personal lo que se ha hecho a los muchachos. Y en primera línea están unos 8 mil alumnos

de otras Normales Rurales, hermanados con ellos mucho antes de que la tragedia llegara a sus vidas.

El ejército

El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 Batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, los policías hayan disparado contra los estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaran a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo. Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca, y según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no había pasado nada. Sin embargo, la noche de la masacre, la señora Pineda hizo 25 llamadas telefónicas, una de ellas al responsable del batallón.

El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 Batallón de Infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del Octavo Batallón de Fuerzas Especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso tráfico de goma de opio que existe en esa ciudad, un punto central de distribución.

No es exageración. Gustavo Castillo publicó en *La Jornada* que en Guerrero se produce más de 60% de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6 mil 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico.

Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio

Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo: el antiguo vendedor de sombreros y joyas, José Luis Abarca.

La plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en *Diario 21*, en su participación el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno. La información nunca fue desmentida.

El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de Guerreros Unidos.

Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 Batallón de Infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa, *Estado Mayor*, el batallón participó activamente en la Guerra Sucia de la década de los años setenta y comienzos de los ochenta del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenas de desapariciones forzadas. Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010 desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe *Ni seguridad ni derechos*, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del ejército en este delito”.

La noche del 26 de septiembre, el 27 Batallón de Infantería no hizo nada para evitar la matanza y la desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después del primer ataque se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.

Los soldados —contó el normalista Omar García a Tele-Sur— “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, *amárrensen* los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y de nos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar””. Luego los fotografiaron.

La mañana del 31 de octubre, una *narcomanta* apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba “Gil”, es decir “el cabo Gil”, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, hoy preso. El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 Batallón de Infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.

A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense —dice Omar García— que en la Guerra Sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el ejército”.

La voz de los padres

Pasan los días y sus hijos no aparecen. Un día las autoridades les dicen una cosa y al siguiente otra. Y las versiones que les dan no concuerdan con las evidencias disponibles. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa no le creen al gobierno. En un primer momento, los funcionarios aseguraron que los muchachos estaban escondidos como presión política. Afirmaron que se encontraban a salvo en algún lugar de la sierra o en un rincón de su escuela. Así transcurrieron días valiosos para encontrarlos con vida, sin que se les buscara en serio. Muy pronto quedó claro que eso no era cierto, pero ninguna autoridad se disculpó con los padres por esa mentira. Nadie tuvo la humildad de confesar que se equivocó.

La noche del 5 de octubre, la historia oficial cambió. Iñaki Blanco, procurador de Guerrero, informó que dos detenidos habían confesado el asesinato de 17 de los 43 normalistas. Según él, Martín Alejandro Macedo Barreda,

vendedor de narcóticos, y Marco Antonio Ríos Berver, sicario de Guerreros Unidos, revelaron que ellos los habían ejecutado por órdenes de un personaje apodado “El Choky”.

Días más tarde, los testimonios de los homicidas se filtraron en la prensa. “El Gaby”, uno de los verdugos, declaró ante el Ministerio Público: “Yo participé matando a dos de los *ayotzinapos*, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están enteritos... la forma de matarlos fue *ancados* y les disparamos por un lado de la cabeza”. Esto —dijo otro— por andar de revoltosos.

Uno de los homicidas confesos, Martín Alejandro Macedo, reveló: “Recibí la instrucción de dispararles (a los normalistas) por parte de ‘El Choky’; los disparos que les realizamos fue en el centro de Iguala... ‘El Choky’ pidió apoyo a la policía municipal, por lo que supe que ‘El Choky’ sí alcanzó a chingar a varios *ayotzinapos*, ya que se estaban poniendo muy locos; una vez que se comienzan a bajar los estudiantes, comienzan a correr y logramos asegurar a 17, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad donde los matamos inmediatamente, ya que no se querían someter y como eran más que nosotros, ‘El Choky’ dio la instrucción de que les diéramos piso...”

Pero casi un mes después, mientras aparecían cadáveres y más cadáveres sin nombre en numerosas fosas clandestinas alrededor de Iguala y las autoridades buscaban que las cifras de los normalistas muertos cuadraran, la versión gubernamental de los hechos volvió a modificarse. Las autoridades nunca aclararon por qué los asesinos confesos habían mentido. Simplemente hicieron borrón y cuenta nueva.

El 7 de noviembre, en una conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam informó que, según tres nuevos testimonios, los 43 jóvenes fueron conducidos al basurero del municipio de Cocula, ultimados, calcinados y sus cenizas arrojadas en bolsas de plástico a un río. El nuevo relato gubernamental de la masacre presenta los resultados provisionales de una investigación en curso como si fueran casi definitivos. Pero además está lleno de huecos, explicaciones poco creíbles y contradicciones evidentes. En *La Jornada*, *Telesur* y *Proceso* se han documentado las opiniones de varios especialistas que ponen en duda la tercera versión oficial de los hechos, la última hasta el momento.

Repasemos algunas de las críticas que se han hecho al informe oficial. Por principio de cuentas, no debió ser nada

fácil para los sicarios someter a un grupo de 43 jóvenes, aguerridos y rebeldes, y trasladarlos dócilmente, sin dejar huella alguna, a varias decenas de kilómetros de distancia de donde fueron apresados por la policía. En la explicación se asegura que algunos se ahogaron en el camino. Sin embargo, los vehículos en que fueron transportados (un camión de 3.5 toneladas y una camioneta de carga) no tenían una cabina cerrada que impidiera la entrada de aire. ¿Por qué entonces se asfixiaron?

El basurero donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes es un lugar al aire libre, en el que es muy difícil alcanzar las temperaturas necesarias para quemar sus cuerpos. Más aún en un día lluvioso, como fue éste. Evitar que la lumbre se propague a otros rincones del vertedero es tarea llena de riesgos. Sin embargo, los pistoleros manejaron la fogata magistralmente. Un incendio de esa magnitud y una peste como la que emiten los cuerpos al consumirse devorados por las llamas difícilmente habrían pasado desapercibidos en la región. Pero nadie se dio cuenta de lo sucedido.

Curiosamente, en el terreno quemado no se encontraron tiras de acero con las que se refuerzan los neumáticos que se usaron para alimentar el fuego. Tampoco hebillas de metal de cinturones y huaraches, cremalleras de pantalones y chamarras, relojes, medallas o amalgamas de piezas dentales de los alumnos. En cambio, sí se hallaron restos de vegetación que sobrevivieron milagrosamente a los calores infernales de la hoguera.

Sorprende también que, según la declaración de los detenidos, hayan podido destruir los huesos con pericia y recogido los residuos a escasas dos horas y media de que la pira fúnebre se extinguió. Las cenizas son un aislante térmico muy eficaz, que pueden conservar el calor durante muchas horas después de apagado el fuego. Es imposible meterlas en bolsas de plástico sin que éstas se derritan.

Finalmente llama la atención la razón por la cual los sicarios aventaron las cenizas al río en bolsas de plástico, cuando el objetivo era no dejar rastro del crimen. Y es todavía más sorprendente que uno de esos empaques no se hubiera roto al chocar con el fondo pedregoso de un río de corriente vigorosa.

La negativa de los padres de familia afectados a reconocer la versión gubernamental como válida proviene no sólo del natural rechazo a admitir un hecho tan doloroso, sino fundamentalmente a que la consideran un torpe guión para dar carpetazo a la tragedia y exculpar al Estado mexicano

de su responsabilidad en el crimen. Para esos padres ya pasó demasiado tiempo sin que sus hijos aparezcan. Están hartos de engaños, maniobras y del intento del gobierno por ganar tiempo.

La voz de la calle

Roberto Zavala Trujillo es padre de Santiago Jesús, uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Apenas este 20 de noviembre, en el pleno de sesiones del Congreso de ese estado, junto a miles de manifestantes que ocuparon el edificio en solidaridad con Ayotzinapa, declaró: “Desde Sonora, a más de 104 años, damos reinicio a la Revolución que no ha caminado”.

El pasado 20 de noviembre, unos 5 mil estudiantes, mineros de Cananea, padres de la guardería ABC, afectados por la contaminación del Río Sonora, ferrocarrileros, feministas, ecologistas y braceros marcharon por las calles de Hermosillo, *tomaron* la sede del Poder Legislativo local y advirtieron: “Hoy sesiona el pueblo, hay quórum”. Antes de entrar en el recinto, dejaron un recado a los diputados en el buzón de sugerencias: “Escuchen a su pueblo, antes de que sea tarde para ustedes”.

El corresponsal de *La Jornada* Ulises Gutiérrez narró cómo allí mismo J. Márquez, otro de los padres de la guardería ABC, dijo a los familiares de los normalistas desaparecidos: “Compartimos su coraje, su frustración por lo que pasa en México”. Para rematar la sesión, los inconformes exigieron que se fuera Peña, y votaron la destitución del Presidente en medio de gritos de “¡justicia, justicia!”. Lo sucedido en Sonora con la *toma* del Congreso del Estado no es un hecho aislado. En varias regiones del país, las movilizaciones ciudadanas exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo reivindican una creciente voluntad de convertirse en un poder constituyente alternativo.

Como muestran las protestas del 20 de noviembre y del 1 de diciembre, a pesar de su desarrollo desigual a escala nacional, el movimiento sigue en fase de ascenso y radicalización. Hoy no son sólo estudiantes los que participan en las marchas. Cada vez más se incorporan a las jornadas de lucha otros sectores: sindicales, organizaciones campesinas, fuerzas urbano-populares, familiares de desaparecidos, religiosos, artistas y hasta niños. En estados como Chiapas, las movilizaciones magisteriales han sido muy intensas, y en Oaxaca han llegado incluso a *tomar* el aeropuerto.

Sin embargo, la indignación social y el descrédito gubernamental van mucho más allá de lo que se ve en las calles. El sustrato de la inconformidad popular es más amplio, vigoroso y complejo de lo que expresan las marchas. De hecho, el malestar de los de abajo ha fracturado la unidad de mando del gobierno federal y ha alcanzado a algunos de sus aliados tradicionales. El deterioro de la figura presidencial parece imparable. Cada día la crisis política se profundiza más.

La estrategia gubernamental para enfrentar la debacle ha sido fallida. La pretensión de Los Pinos de hacer de la masacre de Iguala un asunto local, mera responsabilidad del crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del Estado en el crimen y el carácter nacional de la protesta, han alimentado el descontento. El decálogo de Peña Nieto para sortear los problemas de inseguridad y corrupción naufragó tan pronto fue lanzado a las aguas de la opinión pública. Hasta la revista *The Economist* advirtió que el Presidente pudo haber perdido la oportunidad de cambiar la marea en su contra. La decisión oficial de inventar interlocutores a modo, desligados del movimiento social real, como hizo al negociar el problema de los presos por la marcha del 20 de noviembre, lo único que provoca es que crezca su descrédito.

La crisis de la economía hace aún más difíciles las cosas para Enrique Peña Nieto. Las noticias en este terreno no son nada buenas. El peso se devalúa; la producción petrolera cae de la mano de los precios del crudo; las expectativas de crecimiento del PIB se han reducido a poco más de 2%; el posible incremento de las tasas de interés en Estados Unidos anuncia una inminente salida de capitales y las calificadoras alertan sobre el peligro para las inversiones provocado por la inestabilidad política.

Mientras tanto, más allá de la inminencia del fin del calendario escolar y las vacaciones navideñas, el calendario de las protestas sigue su curso. El 6 de diciembre, miles de maestros, estudiantes y campesinos, con caballos incluidos, *tomaron* simbólicamente la ciudad de México para conmemorar los 100 años de la entrada de los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata. La iniciativa va más allá de la mera contestación política. Apela imaginariamente –como se anunció en la *toma* del Congreso de Sonora– a reiniciar la Revolución que no ha caminado.

Entre el 21 de diciembre y el 3 de enero del año próximo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),

el Congreso Nacional Indígena (CNI) y adherentes de la *Sexta Declaración de la Selva Lacandona* efectuarán el primer Festival Mundial de las Resistencias y la Rebelión contra el Capitalismo. Su lema será: “Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”. La inauguración del encuentro se realizará en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, el 21 de diciembre. “Sabemos –afirman los convocantes– que el capitalismo salvaje y de muerte no es invencible y que en nuestras resistencias está la semilla del mundo que queremos”.

Con la llegada de 2015 se inicia un nuevo ciclo de movilizaciones. Una importante convergencia campesina, sistemáticamente ninguneada por el gobierno federal, acordó *tomar* las calles de Xalapa el 6 de enero, en el aniversario de la Ley Carranza, y el 31 de enero planea efectuar un gran plantón nacional frente a las oficinas de las secretarías de Gobernación y Agricultura. Por su parte, también en enero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene en puertas la organización de una huelga nacional contra la reforma educativa.

Al momento de redactar estas notas, no hay evidencia de que el despliegue de la movilización social haya llegado ya a su punto máximo. Y aunque eventualmente las protestas callejeras disminuyan, la tendencia hacia el desgaste del régimen se mantiene. Vivimos una situación inédita, en la que, como advirtieron los enardecidos sonorenses que ocuparon su legislatura, los de arriba no han querido escuchar la voz de la calle.

La nueva insurgencia cívica

El fuego devora un vehículo frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo. En el chasis de otro derribado, sobre uno de sus costados, manos rabiosas pintaron: “Justicia”. Guerrero está en llamas. La lumbre que devora edificios públicos y automotores expresa la rabia y la indignación crecientes de cada vez más jóvenes en la entidad. Es el termómetro de una insurgencia cívica y popular de largo aliento que sacude todo su territorio y se extiende a más municipios y sectores. Es la evidencia de una ira que cada día transcurrido se radicaliza más y más.

En un primer momento, las protestas se centraron en las autoridades locales y en el Partido de la Revolución Democrática. Edificios municipales y las oficinas del sol azteca fueron incendiadas. Las flamas de la cólera se

extendieron después contra el gobernador con licencia, Ángel Aguirre. Hoy han alcanzado al presidente Enrique Peña Nieto. La exigencia de su renuncia es un clamor a lo largo y ancho de la entidad y del país.

Alrededor de 22 de los 81 municipios del estado están tomados. La cuenta crece cada día. Los plantones surgen como hongos en las plazas públicas. La revuelta no sólo obstaculiza el buen funcionamiento de los cabildos. La multitud analiza echar a andar gobiernos paralelos. Como resultado del alzamiento cívico, la economía local funciona a trompicones. Los hoteles se han vaciado. Los interminables bloqueos carreteros estrangulan el transporte de carga y de pasajeros. El cerco a los grandes centros comerciales frena las transacciones comerciales.

La revuelta actual tiene en normalistas, maestros, policías comunitarias y organizaciones campesinas su columna vertebral. Su larga tradición de lucha y su experiencia organizativa son el sustrato que sostiene la movilización. Sin embargo, el levantamiento va mucho más allá de ellas. En algunas regiones participan hasta empresarios.

En Guerrero hay un gobernador que no gobierna, un mandatario que no manda, una autoridad desautorizada por los ciudadanos. Como narró Arturo Cano, nada más tomar posesión, Rogelio Ortega Martínez pidió liberar la Autopista del Sol, bloqueada por más de ocho horas. Nadie le hizo caso. El 29 de octubre, 33 días después de los hechos, no pudo entrar a la reunión que, en la residencia oficial, Peña Nieto sostuvo con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, porque los familiares no lo reconocen.

En plena crisis de seguridad, y como si Guerrero no fuera un estado soberano, ni siquiera pudo nombrar al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado y al secretario de Seguridad Pública de la entidad. “Le corresponde a la Federación”, dijo a manera de explicación. Y como si fuera un simple funcionario universitario y no el jefe del Ejecutivo, confesó: “Mi vida depende y está en manos del Estado. Es el Estado el que debe garantizarme mi seguridad”. Las declaraciones de Rogelio Ortega hablan por sí mismas. En *El Universal* describe al ex gobernador Ángel Aguirre, responsable de la masacre, como seductor, coqueto, carismático, de apapacho, de sonrisa fácil, bohemio, declamador, excelente orador: ¡un tanque de la política! Y para que no quede duda de sus compromisos, exclamó: “¡Con los amigos, en las duras y en las maduras!”.

La entrevista que le hizo Adela Micha no tiene desperdicio¹. Con la mayor irresponsabilidad, sin evidencia alguna, jugando con los sentimientos de los padres, Rogelio Ortega aseguró que hay indicios de que los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa tienen una alta posibilidad de que pudieran estar vivos. A él no le corresponde decir algo así, sin aportar más pruebas que lo que le dijeron.

En Guerrero existen, desde hace 45 años, organizaciones insurgentes. Hay evidencias serias de la presencia y actuación de al menos cinco de ellas. Tienen implantación social en varias regiones, capacidad de fuego y experiencia en la acción. Varias han acordado formas de entendimiento y coordinación.

En lo inmediato, la masacre y el manto de impunidad con que la clase política ha cubierto los hechos mientras se protege a sí misma provocaron que cinco organizaciones político-militares hicieran pública su solidaridad con los normalistas rurales. El EZLN movilizó el pasado 8 de octubre a veinte mil personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en apoyo a los jóvenes de Ayotzinapa, y se reunió con padres de familia y normalistas en el Aguascalientes de Oventic. Las FAR-LP, el EPR y las Milicias Populares emitieron enérgicos comunicados de denuncia. Por su parte, el ERPI anunció que declaraba la guerra al cártel Guerreros Unidos, que integraba una brigada de ajusticiamiento y que consideraba a la corriente Nueva Izquierda cómplice de los hechos del 26 de septiembre.

En el imaginario popular guerrerense, algunas matanzas han sido el momento fundacional de proyectos político-militares. La masacre de Iguala del 30 de diciembre de 1962 fue clave en el nacimiento de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), dirigida por Genaro Vázquez Rojas. La degollina del 18 de mayo de 1967 en Atoyac fue el hecho nodal para que Lucio Cabañas formara el Partido de los Pobres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento. A la emboscada gubernamental y asesinato de 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur, el 28 de junio de 1995, le siguió el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario. Lucio Cabañas explicó esta dinámica con mucha precisión:

¹ Disponible en <<http://goo.gl/Z7tbZ>>.

Lo que sí es cierto –advirtió– es que con una matanza nos decidimos a no esperar otra. Y hemos dicho aquí: para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones: que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno, que haya un maltrato directo de los funcionarios. Todas esas cosas se pueden aguantar, pero lo que no se aguanta es que se haga una matanza; eso sí no se puede aguantar.

Que esto haya sucedido en Guerrero en años anteriores no significa que necesariamente se repetirá en el futuro inmediato. Sin embargo, la brutalidad de lo sucedido en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, la incertidumbre a la que se tiene sometidas a las familias de los desaparecidos y a sus compañeros, lo caótico y hostil de las pesquisas gubernamentales, el manto de impunidad con que se protege a los culpables, pueden ser el caldo de cultivo para el surgimiento de un nuevo ciclo de insurgencia en el país.

La expansión de la insurgencia cívico-popular guerrerense ha sido acompañada y cobijada por un amplísimo y creciente movimiento nacional de solidaridad. El mundo universitario está en ebullición. En las redes sociales son apabullantes las muestras de descontento contra Enrique Peña Nieto.

La crisis de representación política

Arriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018, y sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez.

El reloj avanza inexorablemente. Cada hora que pasa sin que los muchachos aparezcan con vida crece entre muchos ciudadanos un sentimiento profundo de indignación. Cada día que transcurre sin esclarecer el crimen se reducen los márgenes de maniobra para Enrique Peña Nieto. Cada intentona por achicar la dimensión política de la matanza y convertirla en mera ocurrencia de un alcalde abusivo, su ambiciosa esposa y un grupo de *narcos*, agranda el desgaste del régimen.

En medio de la aflicción, el gobierno federal y el estatal juegan un pulso mezquino. Declaran que trabajan de manera

coordinada al tiempo que se culpan de los hechos. Se “echan la bolita” de manera velada. No se mencionan explícitamente, pero se culpan tácitamente. Sin importar el desconuelo de los familiares, un día el mandatario estatal, Ángel Aguirre, declaró que algunos de los cuerpos hallados en las fosas de Iguala correspondían a estudiantes normalistas, y al poco tiempo el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, lo desmintió.

Lo mismo sucedió entre los aspirantes presidenciales del PRI. Cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, advirtió que la violencia en Iguala puede afectar el ánimo de los inversionistas, también está diciendo que los responsables de mantener el orden interno y garantizar la seguridad no hacen bien su trabajo.

Además de expresar una profunda crisis de seguridad pública y de hastío ciudadano con la impunidad, la oleada de inconformidad social expresa una grave carencia de representación política, nacida del Pacto por México y del régimen surgido de los Acuerdos de Barcelona de 1996.

En 1994, el país vivió un momento de enorme agitación política. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de ese año precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en un reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas –el presidente saliente– y Ernesto Zedillo –el entrante– adquirió proporciones mayúsculas.

Como hizo ahora Enrique Peña Nieto con la firma del Pacto por México, Ernesto Zedillo trató de paliar la crisis promoviendo la firma de un acuerdo político nacional con los cuatro partidos políticos con registro: PRI, PAN, PRD y PT. Sin embargo, el proyecto abortó ante el incumplimiento gubernamental de limpiar los comicios de Tabasco y como resultado del fracaso de la ofensiva militar ordenada contra el zapatismo el 9 de febrero de 1995.

La firma de los acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996 por parte del gobierno federal no fue un hecho ajeno a esta situación de malestar social generalizado en el país. Con ellos, el gobierno buscó desactivar el descontento y ganar tiempo para realizar una maniobra política de mayor aliento: la negociación de una reforma electoral. Efectivamente, de manera paralela al diálogo con el EZLN y sus aliados, la administración de Zedillo impulsó con los partidos un pacto que dio a luz una nueva reforma política definitiva. Esa negociación fue bautizada en su momento

como los Acuerdos de Barcelona, porque las pláticas para fraguarla se efectuaron en las oficinas del subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, ubicadas en la calle de Barcelona en la ciudad de México.

La nueva reforma política consistió, básicamente, en la ciudadanía del Instituto Federal Electoral (IFE), la creación del Tribunal Federal Electoral, poner límite a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, ampliar la pluralidad en la composición del Senado, establecer la afiliación individual a los partidos, crear un nuevo sistema de financiamiento de los partidos y dar el carácter de diputados a los integrantes de la Asamblea Legislativa del DF. La nueva reforma política propició un reparto real del poder entre los tres principales partidos. Ellos participaron en la integración del IFE y del Tribunal Federal Electoral.

El nombramiento de los consejeros ciudadanos se efectuó fuera del Legislativo y con la condición de que las pláticas fueran secretas. El PRI propuso a José Woldenberg, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. Por el PAN fueron promovidos Alonso Lujambio, Juan Molinar y José Barragán. Y por el PRD fueron seleccionados Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa y Jesús Cantú.

Como ha señalado Miguel Ángel Romero, gracias a esa reforma política Zedillo construyó una parte de sus mecanismos de poder transexenal. Y como ha dicho Rosalbina Garavito, se adoptó un rasgo de modernidad política sin cambiar la esencia del régimen autoritario. En las elecciones federales, esa redistribución del poder dio frutos para los partidos de oposición. En 1997, ningún partido tuvo mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, y el PRD ganó el gobierno de la ciudad de México, electo por primera ocasión en décadas. Y en 2000, en las elecciones presidenciales triunfó Vicente Fox.

Sin embargo, esta negociación reforzó el monopolio partidario de la representación política; dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos, y conservó prácticamente intacto el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas.

En esas circunstancias, el gobierno federal hizo abortar los Acuerdos de San Andrés. Incumplió su compromiso de promover una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, y no hizo una sola oferta sustantiva en la Mesa de Democracia y Justicia. Al tiempo siguió con su política de paramilitarizar el conflicto, provocando la ma-

sacre de Acteal, y atacó violentamente varios municipios autónomos.

Desde entonces han proliferado los conflictos políticos y sociales al margen de la esfera de la representación institucional en todo el país. Sus protagonistas están fuera o en los bordes de la política institucional. Los Acuerdos de Barcelona los echaron de la mesa de negociación.

A casi 19 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, mediante el Pacto por México, el gobierno federal y la clase política buscó recetar la misma medicina que en 1996. La actual explosión de descontento popular muestra que el México de abajo no la aguanta más. En el país hay una grave crisis de representación política. La estrategia gubernamental para enfrentar esta crisis ha sido desastrosa. Error tras error, cada paso que las autoridades dan las acercan irremediamente al borde del abismo. Incapaces de comprender la naturaleza de la insurgencia cívica que tienen frente sí, han respondido echando mano de política barata y maniobras burdas.

Así ha sucedido una y otra vez. La versión oficial de que los alumnos de Ayotzinapa habrían sido *ejecutados*, calcinados en un basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río, ha propiciado que los ánimos se exacerbén aún más. Lejos de ofrecer una explicación convincente de los hechos, causó más dudas y malestar. Lo mismo sucedió con el intento presidencial de apropiarse del “Todos somos Ayotzinapa”. Lejos de acercarse a la población, el presidente Peña se distanció aún más. La gota que derramó el vaso fue su llamado a superar el dolor por Ayotzinapa.

El gobierno federal pretende establecer un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica para evadir su negligencia y responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas internacionales en su contra. Busca ocultar que se trató de un crimen de Estado y de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su explicación está llena de omisiones, inconsistencias y contradicciones. No es creíble.

No es el único que lo piensa. Una y otra vez, en las distintas movilizaciones que se producen en el país, la multitud corea dos consignas que sintetizan no un estado de ánimo pasajero, sino las convicciones profundas de quienes las vocean. Al gritar “¡Fue el Estado!” señalan a quien consideran responsable de la barbarie. Al exigir “¡Fuera Peña!” expresan lo que ven como vía de salida del conflicto. La protesta cívica y popular ha entrado en una nueva etapa.